

**CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN  
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL SENA VIGENCIA 2019**

**ANA LILIANA CAMACHO MANTILLA. CODIGO: 0602036**

**Correo: [u0602036@unimilitar.edu.co](mailto:u0602036@unimilitar.edu.co)**

**Docente:**

**JULIO GOMEZ**



**Universidad Militar Nueva Granada – campus Cajicá**

**Diplomado de Contratación Publica**

**2021**

## **RESUMEN ESTRUCTURADO:**

La Constitución Política de 1991 rige nuestro ordenamiento, señalando preceptos de vital importancia para los Entes Territoriales y todas las instancias que conforman el Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta la aplicación de mandatos democráticos y participativos, así como promoviendo en su actuar el respeto de la dignidad humana en concordancia con la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, a través del presente ensayo de tipo cualitativo, con un método descriptivo y técnicas como el análisis documental y bibliográfico traducido en la recolección de información, se pretende evidenciar la importancia de la aplicación del principio de planeación en los procesos contractuales que para el caso del presente estudio, se hará énfasis en los contratos de prestación de servicios, así como se revisara de manera conjunta el principio de economía procesal y su injerencia en la optimización de recursos públicos.

Es importante tener en cuenta que en el proceso pedagógico que implementa el SENA, al inicio de cada anualidad incluso meses atrás en los ejercicios de planeación institucional, se establecen contenidos programáticos a fin de culminar satisfactoriamente cada ciclo o trimestre de formación y con ello los aprendices lograr su titulación, sin embargo, se concluye con la presente revisión en SECOP II que continuamente se firman adiciones y prorrogas a los contratos de prestación de servicios de los instructores con el fin de garantizar el ciclo formativo durante la vigencia, situación que puede generar rupturas en el proceso de enseñanza al no lograr cumplir en los tiempos legales con dichos tramites contractuales y de igual manera puede generar un desgaste de la maquinaria administrativa dada por la falta de una planeación efectiva que lo hace un eslabón vulnerable a las prácticas corruptas las cuales no van en la misma línea de la priorización de los servicios que *per se* debe garantizar el Estado, ubican a la administración pública como un agente amenazante y poco garante de la eficaz prestación de servicios y con baja

efectividad en la garantía de derechos de los administrados, perpetuando la vulnerabilidad de la sociedad que aun cree en los principios constitucionales que nos rigen y por los cuales dejan sentado su voto en las diversas instancias de participación.

### **PALABRAS CLAVE:**

Contratación pública, principio de planeación, contratos de prestación de servicios, prorrogas, adiciones.

### **INTRODUCCION:**

En el desarrollo evolutivo del pensamiento humano se ha realizado una búsqueda permanente del buen vivir y del favorecimiento de la transparencia como parte fundamental de la constitución de los Estados y por ende de las sociedades. Es así como, revisando someramente el trasegar filosófico del individuo, retomo los pensamientos impulsados por Seneca, aquel filosofo, político, orador y escritor romano, ya que en su actuar político – y no precisamente desde una puesto de alto poder- promulgó la moral para lograr un mejor y justo gobierno, fundamentando sus escritos en el respeto y compromiso frente a los gobernados, y a toda costa ataco la corrupción de aquellos que fungían algún tipo de poder para pisotear la dignidad humana, lo cual le costó ser víctima de grandes difamaciones e incluso la muerte.

Este fundamento filosófico se ha ido perfeccionando en la medida que el ser humano dispone de mayor cantidad de recursos y conocimiento para precisamente, medir el actuar de sus gobernantes con una premisa prioritaria de favorecer los derechos de aquellos más vulnerables y lograr el equilibrio social tan anhelado.

Un ejercicio más actual se puede visibilizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada a través del discernimiento de los representantes de todas las regiones del mundo y proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la cual

fundamenta sus preceptos de paz, justicia y libertad, en el respeto por la dignidad humana, siendo esta la hoja de ruta para muchas constituciones políticas, incluyendo la nuestra.

Todo lo anterior, ha llevado a que en el contexto colombiano y basados en los principios establecidos por la Constitución Política de 1991, se formulen y pongan en marcha diversas estrategias de intervención que buscan disminuir los riesgos de corrupción al interior de las entidades públicas, cuya misionalidad es el bien colectivo de los más vulnerables, plasmado actualmente en la Ley 1474 de 2011, norma que estimula la implementación de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y propende por el control de la gestión pública, así como por la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en concordancia con el principio de publicidad que esbozan nuestros preceptos normativos.

Es así como, acotando al artículo 2 de la Constitución Política: *“fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”*, los diversos actores de gobierno nacional han ido generando un componente normativo importante en el cual se establecen precisamente los procesos y procedimientos que favorecen la dignidad humana con la optimización de los recursos del Estado y del cual todos los ciudadanos podemos ejercer veeduría al ser documentos públicos divulgados en las plataformas destinada para tal fin como son: SECOP I, SECOP II, entre otros, aprovechando los medios tecnológicos que la evolución ha dispuesto al servicio del mismo hombre.

Sin embargo, hoy pese a que existe un recorrido ético, moral y filosófico de gran impacto en las momentos históricos del ser humano y las sociedades, se siguen evidenciando focos de corrupción en los procesos liderados por el Estado, esto debido posiblemente a las brechas normativas que favorecen la conductas dolosas y/o culposas de los agentes internos o externos de

las instituciones estatales, como lo es el hecho que la inadecuada planeación contractual que conlleva a poner en riesgo la atención y servicios dirigidos a los más desfavorecidos o población objeto de su misión institucional, ya que desgasta el aparato contractual en cabeza de los ordenadores del gasto y sus equipos técnicos, jurídicos y financieros, como también puede abrir espacios para la intervención de agentes nocivos para el gasto de los recursos públicos.

El presente ensayo pretende ahondar en los procesos contractuales de una institución estatal, en la cual se evidencia prorrogas y adiciones durante la vigencia 2020, y con ello evaluar como estas acciones repetitivas van en contra del principio de economía de la contratación estatal, así como va en contravía de la dignidad humana al poner en riesgo no solo el cumplimiento de objetos misionales sino también el servicio a la comunidad y la garantía de derechos de las comunidades vulnerables, así como el cumplimiento de los fines del Estado.

#### **PREGUNTA PROBLEMA:**

¿Cómo la falta de planeación estatal conlleva al desgaste administrativo y el incremento de las prórrogas y/o adiciones contractuales, afectando los ejes misionales y la contratación de prestación de servicios en el SENA durante el 2019?

#### **OBJETIVO GENERAL:**

Establecer si la falta de planeación estatal actualmente visibilizada con el incremento de prorrogas y/o adiciones contractuales, afecta la misión institucional y la contratación pública, visibilizado en la dinámica contractual del SENA durante la vigencia 2019.

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

1. Describir los argumentos jurídicos que establece la planeación estatal los cuales se encuentran plasmados en la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993 y otras normas concordantes.

2. Identificar a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, como el SENA desarrolla sus procesos contractuales en lo concerniente a contratos de prestación de servicios en la vigencia 2019.
3. Identificar las causas que afectan el principio de planeación en los contratos de prestación de servicios objeto de esta revisión.

## **DISCUSIÓN:**

### **Argumentos jurídicos relacionados a la planeación estatal:**

En la estructura del pensamiento se está en la continua búsqueda de soluciones a través de la organización de los procesos mentales que faciliten llegar al objetivo trazado, es decir, que para que todo este engranaje funcione en pro de un bien específico, debe existir la planeación, vista como la organización de cada proceso y procedimiento teniendo en cuenta los diversos factores que en ello puedan intervenir, los cuales van desde definir el problema a resolver, pasando por el planteamiento de alternativas de solución, visibilizando los factores de riesgo, y desplegando las acciones para lograr la meta.

Es por ello importante recordar al famoso estratega militar y filósofo chino, el General Sun Tzu o conocido más como “Maestro Sun”, en cuya obra más celebre “El Arte de la Guerra” (escrito aproximadamente 2.500 años en la antigua China) presenta basado en su experiencia las diversas formas como gestiono el conflicto para ganar las batallas, no solamente a través de la inteligencia militar sino también promoviendo la diplomacia y el dialogo como medio conciliador entre Estados. Esta obra ha inspirado a políticos, economistas y otras áreas del conocimiento para su aplicación conceptual en la administración pública, entre otros aspectos, según afirma Coelho (2017), precisamente aplicando el concepto de planeación: analizar el problema y evaluar las

posibles soluciones, planificando la estrategia y reconociendo el liderazgo para obtener victorias partiendo de la aplicación del principio de la justicia.

Ahora bien, dentro de ese trasegar del pensamiento y los principios de la planeación debemos tener en cuenta a autores como Nicolas de Maquiavelo quien afirmaba que para el logro de objetivos se debía contemplar “el aprovechamiento de las oportunidades, así como el análisis de los hechos anteriores, las causales de su éxito y fracaso, evitando las amenazas o situaciones perjudiciales y la necesidad de la planeación para un buen gobierno” (Delgado, 2012).

Es así como dentro de los antecedentes históricos y diversas corrientes, también se debe contemplar dos estructuras del pensamiento en lo que concierne al concepto de planificación: la política que la asume como un proceso social y político que reconoce la influencia de las fuerzas productivas y la organización social; y la tecnocrática que la conceptúa como una metodología para la toma de decisiones racionales. (Lopera, 2014).

Para el contexto colombiano, la planeación en la contratación estatal se visibiliza de manera general en la Constitución Política, en su artículo 209 el cual establece:

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Este precepto constitucional debe estar inmerso en toda la normatividad que rige las actuaciones del Estado Social de Derecho, como fundamento de la eficiencia y eficacia de las instituciones y sus representantes quienes en su fin primordial deben velar por el interés colectivo de las sociedad colombiana.

En concordancia con lo anterior, la Ley 80 de 1993 por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, establece en el artículo 3:

Los servidores públicos tendrán en consideración que celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la administración que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Situación que reafirma en el capítulo II a través de los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Así mismo esta ley, en el artículo 32: De los contratos estatales, define en el numeral 3 los contratos de prestación de servicios como aquellos que: “se celebren con entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, por ende, su fin primordial es garantizar las acciones que sustentaron la necesidad del contrato, tal como se debe establecer en los estudios previos (Cuellar, M. 2010) dentro del ejercicio precontractual que desarrolla la entidad.

Para que todo lo anterior se haga visible, es de vital importancia contemplar la planeación como eje fundamental de la administración pública, ya que la gestión de las Entidades del Estado debe ser precedida de un estudio argumentado plasmado en los estudios previos (Art. 2.1.1 Decreto 734 de 2012: Estudios y documentos previos), una revisión de las cargas al interior de la institución que genere un análisis de los indicadores de gestión frente al cumplimiento de los ejes misionales de la misma al igual que de los lineamientos estratégicos institucionales y con ello se evalúe la necesidad del talento humano el cual es el objeto de la prestación del servicio específico que se requiere. Con ello se define con certeza las condiciones del contrato, presupuesto de este conforme a los parámetros económicos de las Entidades del orden nacional que lo rigen y la duración que permita la garantía del objeto contractual, sin afectación del servicio pactado ni tampoco de la población objeto de intervención, nuevamente insistiendo en el cumplimiento de los fines del Estado.

Ahora bien, también se debe tener claro que la planeación no debe enmarcarse solamente en los estudios previos de una manera general, como se ha descrito anteriormente, sino también es importante considerar los posibles riesgos que la ausencia de un servicio o talento humano contratado puede acarrear para el cumplimiento de los objetivos con calidad y eficiencia, sin ignorar la trazabilidad histórica de las circunstancias que generaron el objeto del contrato, considerando la planeación como un proceso dinámico, cuestión que a nivel normativo no se encuentra literalmente establecido desde la mirada integral y en sincronía con el presupuesto nacional que garantice la cobertura en cada vigencia, según el cronograma establecido para tal fin. Parte de esa revisión histórica debe sustentarse en los ejercicios de supervisión e interventoría contractual, así como en la medición del impacto de las acciones que enmarcan lo contratado, ya que este seguimiento puede brindar herramientas fundamentales para la toma de decisiones al momento de sustentar en los estudios previos del contrato a gestionar (Sentencia Consejo de Estado sec 3ª. Exp. 19730, 5 febrero de 2012), precisamente para dar cumplimiento a lo que en sí estipula el concepto de planeación: optimizar recursos, minimizar riesgos, cumplir objetivos y metas, ejecutar presupuestos de manera transparente y oportuna, cubrir las necesidades de la población objeto, entre otros. De igual forma también se debe contemplar los efectos a futuro de la planeación, concebida esta como el cumplimiento del servicio contratado, una necesidad satisfecha, una garantía de impacto, es decir, la sostenibilidad de lo invertido en la línea histórica de la sociedad en pro de su propia mejora, lo cual puede dar a entender que, “la planeación debe ser entendida como un sistema dinámico, que integra múltiples saberes y metodologías, aplicable en todos los campos de intervención del ser humano en la naturaleza y en la sociedad” (Aponte, 2014).

Es así como la ley 1474 de 2011 establece el concepto de maduración de la contratación, resaltando la identificación de la necesidad a intervenir que sustenta el surgimiento del contrato,

en concordancia con el artículo 26 de la ley 80 de 1993, frente al principio de transparencia en el marco de la contratación estatal, como mecanismo de cumplimiento de objetivos y mejora de la calidad de vida de la población, así como la ley 1150 de 2007 introduce medidas para la eficiencia y transparencia de la ley 80 de 1993, retomando el artículo 2, numeral 4, parágrafo 1 que refiere a la importancia de dar claridad frente a los parámetros jurídicos que sustentan la contratación y parágrafo 2 que menciona los principios de transparencia, economía y responsabilidad con las respectivas reglas para su cumplimiento.

Afirma la Corte Constitucional que el “principio de planeación debe entenderse, en el marco de la contratación pública, como aquella exigencia que recae sobre la entidad pública de asegurar la veraz y amplia realización de estudios técnicos previos adecuados, de tal manera que resulte posible, fiable y público que la entidad defina con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan, la distribución de riesgos y el precio” (Restrepo; Betancur. 2020)

Así mismo la Corte en la Sentencia C-300 de 2012, hace énfasis en el principio de planeación para la contratación pública como medio para obtener un bien común del interés colectivo, relacionado con el concepto de indicadores de gestión y control. También ha señalado la Corte:

El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional Colombiana, C-300/2012, p. 45).

Por ello, la ausencia de planeación afecta la eficacia, la eficiencia, la igualdad e incluso al objeto del proceso, generando una afectación al interés público que se persigue con ocasión del contrato (Amaya, 2015).

De igual manera el Consejo de Estado reitera los principios importantes en la contratación estatal, enfatizando que la contratación pública no debe ser resultado de la mediocridad ni la improvisación señalando lo siguiente:

La eficacia de todos los principios que rigen la actividad contractual del Estado, en especial los dos últimamente mencionados es decir el de la transparencia y el de la economía, depende en buena medida de que en ella se cumpla con los deberes de planeación y de selección objetiva. (Relatoría del Consejo de Estado, 2012, p. 9)

Dichas disposiciones de la Corte y el Consejo reafirman lo que estipula la Constitución y la Ley 80 de 1993, esta última en su artículo 25, frente al principio de economía, ya que al conocer de fondo la entidad lo que necesita, implica y debe garantizar al programar su contratación, traducido en los objetos contractuales que establece, podrá aprovechar de manera mas eficiente los recursos públicos y con ello garantizar el cumplimiento en calidad, eficiencia y eficacia de sus ejes misionales en pro del interés colectivo de la población objeto, traducido en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores riesgos para el presupuesto estatal (Colombia Compra Eficiente)

Es tal la importancia de la planeación en la contratación estatal, que el Ley 599 de 2000 – Código Penal Colombiano, en el capítulo V, artículo 50 señala que las entidades estatales deberán responder por actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y causen perjuicios a sus contratistas, en concordancia con el artículo 26 de la ley 152 de 2019, Código General Disciplinario: “la falta disciplinaria”, el cual impone sanción en conductas que violen en buen actuar del servicio público y vaya en contravía de la ley; y de igual

manera el numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, adicionado: también será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancia que puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando este efectivamente se presente.

Todo lo anterior, enfatiza el deber ser de la administración pública en cumplimiento de lo consagrado en la norma, que busca la garantía de derechos de sus administrados.

### **Identificación de procesos contractuales en SECOP II:**

Ahora bien, en el contexto colombiano surgen algunas situaciones que llaman la atención dentro del actuar de las entidades del orden nacional, departamental y municipal en cuyo caso para el presente ensayo, se hará una breve revisión de situaciones particulares al interior del SENA en vigencia del año 2019, con el fin de analizar la dinámica contractual y su impacto en el atención de la población objeto en el marco de su misionalidad.

Para tal fin es importante, traer a colación un breve recuento histórico de cómo surgió el Servicio Nacional de Aprendizaje conocido a nivel nacional como SENA.

Fue constituido bajo el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957, por gestión de economista Rodolfo Martínez, quien en su objeto inicial planteo la idea de “crear una entidad de enseñanza laboral y técnica”. En 1960 amplio su radio de acción de 8 a 30 centros de formación, ampliando a 50 en 1968. Fue incluso modelo para otros países al ver el impacto de sus procesos de formación en la industria, la agricultura, el comercio y en general la capacidad productiva y económica del país. En 1985 incorporo en sus procesos de aprendizaje a líderes campesinos, indígenas y comunidades beneficiarios de la Reforma Agraria, potenciando la capacidad de producción del sector rural. En 1990 se creo la Agencia Pública de Empleo, como mecanismo de intermediación laboral y parte de la culminación de los objetivos de aprendizaje en las diversas áreas donde desarrolla la formación. En esa proyección de mejora, en 1996 unió sus esfuerzos con el Instituto

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) a fin de incorporar acciones formativas en investigación y modernización científica. A fin de continuar expandiendo su actuar, incorporo aulas móviles para el año 2000. En el 2005, se asocio con el Fondo Emprender para gestionar capital semilla en los emprendimientos generados por los procesos de aprendizaje. Ingreso en el 2008 a WorldSkills en búsqueda de mejorar sus procesos formativos a nivel técnico y tecnológico. En el 2015 nace SENA Emprende Rural (SER), a fin de empoderar a los jóvenes rurales para la constitución de emprendimiento y fortalecimiento de sus habilidades en el sector rural. De igual manera, posterior al proceso de paz, se amplio su misionalidad buscando beneficiar a la población reinsertada y en la zonas de conflicto adaptando sus procesos de formación acorde a las necesidades de sus aprendices.

Con ello se puede evidenciar, que el SENA como parte del Estado, concibe su misión y visión para dar cumplimiento a los fines constitucionales y normativos, en pro de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, generando un impacto en la economía y productividad del país, así como abre la ventaja de incorporación laboral para garantizar que el sector productivo se dinamice e innove según el mismo avance de la tecnología y los laboratorios de aprendizaje. Sin embargo, al hacer la presente revisión en sus procesos contractuales deja entrever que las continuas adiciones y prorrogas a los contratos de prestación de servicios de sus instructores, puede poner en riesgo la continuidad de sus procesos, la misionalidad y el impacto de sus programas formativos. Para tal fin, a continuación, en el cuadro anexo se evidencia algunas situaciones visibles en la plataforma SECOP II que nos permiten llevar al análisis sustento del presente ensayo y que incluso es la misma dinámica que varios Entes del Estado ejecutan y que ponen en riesgo el cumplimiento de los deberes constitucionales descritos anteriormente, haciendo claridad que los procesos formativos se establecen por ciclos de 3 meses y con ello también los tiempos de la contratación puede presentar variantes.

OBJETO DEL CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE LEGALIZACION	FECHA DE TERMINACION	PRORROGAS-ADICIONES-NUOVO CONTRATO
Servicios profesionales temporales para la atención psicológica de los aprendices del CASA SENA Regional Santander	CO1.PCCNTR.778578	4/02/2019	20/08/2019, con prórroga hasta el 26/11/2019	Se adiciona el presente contrato No. CO1.PCCNTR.778578 de 2019 en valor por \$8.830.464 y en tiempo por Tres (3) Meses y Seis (6) Días.
Prestar los servicios personales para apoyar a la Oficina de Sistemas en todas las actividades que le sean asignadas para el mejoramiento de los servicios tecnológicos	CO1.PCCNTR.888509	13/03/2019	30/11/2019, con prórroga hasta el 31/12/2019	De acuerdo a comunicación interna institucional en la que el Jefe de la Oficina recomienda realizar la adición y prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.888509, puesto que es necesario que una persona atienda los requerimientos de la institución frente a los servicios TIC de la Dirección General, las 33 Regionales y los 117 Centros de Formación Profesional de la Entidad. por lo anterior, la Secretaría General procede a realizar la respectiva modificación del contrato en mención.
Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área de administración de empresas de economía solidaria, en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.	CO1.PCCNTR.1029721	15/07/2019	11/12/2019, con prórroga hasta el 20/12/2019	Se adiciona y se prorroga el contrato, por solicitud expresa del supervisor, de acuerdo a la necesidad del servicio, previa autorización de la subdirección de centro. Adicionalmente se ajustan las fechas estimadas de inicio y terminación a fechas reales y se adjunta clausulado adicionado
Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área ambiental, en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.	CO1.PCCNTR.1029132	16/07/2019	11/12/2019, con prórroga hasta el 18/12/2019	Se realiza esta modificación por solicitud expresa del supervisor, previa autorización de la Ordenadora del gasto, adicionalmente se modifican las fechas de inicio y terminación ya que el contrato inició en fecha posterior a la estimada.
Prestar los servicios personales de carácter temporal para apoyar la implementación del programa integral de bienestar de los aprendices en el componente estratégico de salud en el cual se deben fomentar espacios de promoción de la salud física y mental para el fortalecimiento de hábitos de vida saludable en las sedes y el Centro Agroturístico de la Regional Santander.	CO1.PCCNTR.888822	12/03/2019	18/12/2019, con prórroga hasta el 31/12/2019	Se realiza adición acorde con las condiciones técnicas, financieras, y jurídicas inicialmente pactadas y al presupuesto del SENA. Valor de la Adición: Seiscientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte (\$604.788). Plazo adicionado: 12 días. Valor total del Contrato: Catorce millones quinientos catorce mil novecientos doce pesos m/cte (14.514.912)
Prestar los servicios personales de carácter temporal para apoyar la implementación del programa integral de bienestar de los aprendices en el componente estratégico de salud en el cual se deben fomentar espacios de promoción de la salud física y mental para el fortalecimiento de hábitos de vida saludable en las sedes y el Centro Agroturístico de la Regional Santander	CO1.PCCNTR.890312	14/03/2019	18/12/2019, prorrogado hasta el 31/12/2019	Se realiza adición acorde con las condiciones técnicas, financieras, y jurídicas inicialmente pactadas y al presupuesto del SENA. Valor de la Adición: Seiscientos cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte (\$604.788). Plazo adicionado: 12 días. Valor total del Contrato: Catorce millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos trece pesos m/cte (\$14.464.513)
Prestar los servicios personales como instructor para orientar formación complementaria FIC en el programa Gestión del riesgo del centro industrial del diseño y la manufactura	CO1.PCCNTR.810101	8/02/2019	9/12/2019, con prórroga hasta el 20/12/2019	Teniendo en cuenta que el supervisor de este contrato, presentó solicitud de adición por valor de \$ 1.349.238, con un plazo adicional de 11 días, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Ordenador del Gasto del CIDM, previo estudio de las condiciones jurídicas (artículo 40 inciso segundo del parágrafo, Ley 80 de 1993) y financieras (recurso disponible en el CDP 519 de 2019) que sustentan ésta adición contractual, además de la necesidad allegada por el Supervisor, considera procedente realizar la adición adjuntado los documentos correspondientes al trámite contractual, modificando las siguientes condiciones: Valor Inicial del contrato: \$36.797.400 Valor mensual: \$3.679.740 - Valor de la adición: \$1.349.238 - Valor final del contrato con adición: \$38146638 - Plazo inicial del contrato: 10 meses - Plazo de la adición: 11 días: Plazo final del contrato con adición: 10 meses 11 días - Fecha de terminación del contrato: 20/12/2019. Se deja constancia que el contratista deberá adicionar la Garantía de Cumplimiento de acuerdo al nuevo valor y plazo de ejecución, estipulado en este contrato.
Prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área de la construcción en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.	CO1.PCCNTR.806730	6/02/2019	10/12/2019, con prórroga hasta el 20/12/2019	Se adiciona y prorroga el contrato, por solicitud expresa del supervisor, de acuerdo a la necesidad de la formación según calendario académico, previa autorización de la subdirección de centro. Adicionalmente se aclara el lugar de ejecución y se ajustan las fechas estimadas de inicio y terminación a fechas reales.
Prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área de la construcción en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.	CO1.PCCNTR.806727	8/02/2019	10/12/2019, con prórroga hasta el 20/12/2019	Se adiciona y prorroga el contrato, por solicitud expresa del supervisor, de acuerdo a la necesidad de la formación según calendario académico, previa autorización de la subdirección de centro. Adicionalmente se aclara el lugar de ejecución, se ajustan las fechas estimadas de inicio y terminación a fechas reales y se aclara la información bancaria, de acuerdo al certificado que se encuentra en documentos del proveedor

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal por periodo fijo para impartir formación profesional integral en programas de formación titulada y/o formación complementaria presencial en el área ADMINISTRACIÓN y demás de su competencia, en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Regional Santander	CO1.PCCNTR.803648	5/02/2019	05/09/2019, con prórroga hasta el 17/12/2019	Se adiciona y prorroga el presente contrato a petición de la supervisora y con autorización del ordenador de gasto, para ello se adjunta.
--	-------------------	-----------	--	---

### **Verificación del proceso contractual:**

Teniendo en cuenta lo evidenciado, al revisar de manera aleatoria los procesos de contratación directa en contratos adjudicados y celebrados para la prestación de servicios durante la vigencia 2019 en el SENA, debemos iniciar el análisis de dicha revisión retomando la misión específica de la institución, la cual es:

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. (Ley 119/1994).

Es así como dicha institución ofrece a la población ciclos formativos trimestrales con contenidos programáticos secuenciales a fin de generar el conocimiento necesario según el eje de aprendizaje escogido por el aprendiz, haciendo un engranaje en la construcción del conocimiento que permita culminar satisfactoriamente dicho proceso formativo.

Las ordenes de prestación de servicios revisadas en SECOP II corresponden a la contratación de diversos perfiles profesionales como: psicólogo de atención a los aprendices, ingeniero de sistema de soporte tecnológico, profesionales para ejercer como instructores en diferentes ambientes de aprendizaje en los centros de formación agroempresarial, agroturístico y gestión del riesgo, cuyo proceso contractual se analizará a continuación:

- Psicólogo de atención a los aprendices: Este contrato permite un acompañamiento mas cercano a los aprendices, fortaleciendo sus habilidades sociales, suministrando pautas para la mejora de la salud mental, estructurando su proyecto de vida para el cumplimiento de sus objetivos, lo cual permite cimentar sus metas en el marco de los procesos de aprendizaje iniciados, entre otros aspectos, es decir, que desde que se cuente con usuarios inscritos en los ambientes de enseñanza deberá existir dicho acompañamiento profesional que conlleve a la continuidad y culminación de la meta de aprendizaje. Sin embargo, se evidencia que el contrato tiene como primera fecha de terminación el mes de agosto con prorroga al mes de noviembre, lo cual evidencia que durante el mes de diciembre no se garantiza este acompañamiento pese a que el ciclo de enseñanza esta establecido hasta el mes de diciembre.
- Ingeniero de sistemas de soporte tecnológico: Este perfil profesional debe realizar acciones preventivas, correctivas y de mantenimiento de los servicios tecnológicos que requiere el SENA garantizando el funcionamiento de los ambientes de aprendizaje así como de las plataformas para registro de notas y otros tramites requeridos por los aprendices, los instructores y el personal administrativo, pero se evidencia que sus servicios fueron contratados en el mes de marzo pese a que se dio inicio de actividades a mediados del mes de enero, así como la primera fecha de terminación del contrato se estipulo en el mes de noviembre y con prorroga hasta diciembre, situación que no garantiza el debido funcionamiento de las herramientas tecnológicas de la institución afectando el servicio tanto en clientes internos como externos.
- Profesionales para ejercer como instructores en diferentes ambientes de aprendizaje en los centros de formación agroempresarial, agroturístico y gestión del riesgo:

\*Para formación en área de administración de empresas de economía solidaria: inicia contrato en julio, con primera fecha de terminación el 12 de diciembre y prorroga hasta el 20 del mismo mes.

\*Para formación en área ambiental: inicia contrato en julio, con primera fecha de terminación el 11 de diciembre y prorroga hasta el 18 del mismo mes.

\*Para formación complementaria FIC: inicia contrato en febrero, con primera fecha de terminación el 9 de diciembre y prorroga hasta el 20 del mismo mes.

\*Para formación en el área de construcción: inicia contrato en febrero, con primera fecha de terminación el 10 de diciembre y prorroga hasta el 20 del mismo mes.

\*Para formación en el área de administración: inicia contrato en febrero, con primera fecha de terminación en septiembre y prorroga hasta el 17 de diciembre.

Es importante tener en cuenta que acorde a los ciclos formativos y centros de enseñanza se planea la contratación de los perfiles profesionales lo cual justifica que algunos contratos inician en febrero y otros en el segundo semestre, sin embargo se evidencia en la revisión realizada que los contratos pactaron inicialmente como fecha de terminación la primera o segunda semana de diciembre y posteriormente fueron prorrogados por una semana más, lo cual constituye un panorama de riesgo en lo que concierne a todo el procedimiento que implica elaborar una adición o prorroga por parte de todas las áreas implicadas para tal fin, es decir, el engranaje entre la supervisión, los jurídicos, el grupo financiero e incluso el ordenador del gasto, así como depender de plataformas de registro que en ocasiones se colapsan, las múltiples cargas laborales, o concurrencia de procesos a atender y obviamente también factores humanos dentro de las dinámicas institucionales propias, que a veces pueden llevar a dar por terminado un contrato y a fin de suplir la necesidad manifiesta delegando o sobrecargando de funciones a otro profesional que en

ocasiones no tiene incluso el perfil adecuado para asumir dicha asignación, poniendo en riesgo la calidad y pertinencia del proceso formativo.

- Profesionales para apoyar la implementación del programa integral de bienestar: inicia contrato en el mes de marzo, con primera fecha de terminación el 18 de diciembre y prorroga hasta el 31 del mismo mes, siendo este perfil el que interviene directamente tanto con los aprendices, como con los instructores y personal administrativo, ya que tiene la responsabilidad de generar espacios armónicos, de escucha y salud mental de manera transversal e integrativa, para el favorecimiento de los procesos y cumplimiento de la visión y misión institucional, sin embargo, pese a que es una intervención que debe ser planeada días antes de contar con el ingreso del personal a la institución, donde debe existir un cronograma de actividades y rutas claras de intervención, el contrato inicia en el mes de marzo cuando ya han transcurrido dos meses en los cuales toda la comunidad ha iniciado labores y su vez se evidencia una prórroga que permite completar la anualidad y cerrar el ciclo de intervención de todos los agentes.

La revisión de los contratos de prestación de servicios seleccionados permite evidenciar un riesgo en la continuidad de los procesos contractuales que conlleva a la continua elaboración de prorrogas y/o adiciones en tiempo y presupuesto a fin de lograr cumplir los objetos contractuales pactados al inicio de la vigencia. Lo anterior, se constituye como un riesgo potencial a la interrupción de los tiempos de ejecución, toda vez que las dinámicas dentro del servicio público son muy cambiantes y se puede generar algún tipo de incumplimiento debido al no empate de los términos entre un trámite u otro de adición y prórroga. Esto sin contar que según se evidencio en la presente revisión, se denotan errores en los meses y/o días establecidos de las adiciones que requieren otra adición para el ajuste del mismo.

Sumado a lo expuesto, es importante considerar que el equipo jurídico encargado de realizar dichas actuaciones puede llegar a saturarse por la cantidad de procesos contractuales que se llevan a cabo al interior de la institución, ya que en dicho equipo convergen varios tipos de procesos a su cargo, además de otra situaciones que pueden retrasar sin quererlo el cumplimiento de las acciones delegadas, relacionados con la naturaleza humana y colapsos en las herramientas tecnológicas.

Al existir este riesgo potencial se puede en algún momento de la línea del tiempo, ver afectado el cumplimiento de las atenciones y ciclos formativos que alteren los cronogramas planteados, así como las gestiones encaminadas a la puesta en marcha de emprendimientos y otras situaciones que se traducen en la afectación del servicio hacia la comunidad del SENA tanto con los instructores, los aprendices como también el personal administrativo, incluso en ocasiones el talento humano ha trabajado sin remuneración mientras se solucionan los tramites contractuales precisamente permeados por una falta de planeación efectiva a los inicios de cada vigencia según ha manifestado la Procuraduría y la Contraloría en algunas intervenciones.

La Contraloría General de la Republica hallo desde suministro de equipos usados hasta fallas en la planeación de la contratación y violación del principio de economía por falta de estudio de mercados para generar valores reales sobre los servicios contratados, fallas en la ejecución contractual, en la interventoría y supervisión por la no entrega oportuna, por parte de contratistas, de los perfiles de trabajadores a contratar; incumplimientos permanentes en las obligaciones estipuladas en la etapa de transición, incumplimientos en la implementación de herramientas de monitoreo para los sistemas de información y hasta modificaciones en las características técnicas de algunas fichas sin estar facultado

para ello, son las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría.

(Sindicato SENA. Marzo de 2015)

Es importante tener en cuenta que el SENA es una institución de aprendizaje de vieja data, lo que da a entender que pasados ya más de 60 años desde su creación, se debe conocer por parte de sus directivos la importancia de mantener la continuidad de los procesos de aprendizaje durante los meses y días de cada vigencia, sin embargo, al revisar los procesos contractuales señalados se constata que no existe una planeación clara al momento de formular los estudios previos para cada objeto contractual toda vez que la programación presupuestal se ve acortada en tiempo y recurso; es así como cada cierta temporada se requiere la justificación del supervisor para la elaboración de las adiciones y prorrogas que permitan dar feliz término del proceso de enseñanza a los aprendices, o dar cumplimiento a otros procesos vitales dentro del funcionamiento institucional como es la atención psicológica de los mismos, situación de vital importancia teniendo en cuenta las tasas de morbilidad relacionadas a enfermedades mentales en el país, más ahora en tiempos de pandemia, situaciones que afectan el objeto misional de la institución. Situación que fue denunciada en enero de 2018 por el Sindesena por la no contratación de cientos de instructores para los ciclos de formación, entre otras situaciones conocidas a nivel nacional.

Estas dinámicas saturan el eje administrativo y jurídico de las instituciones, toda vez que deben desplegar sus esfuerzos en procesos de contratación a repetición durante casi toda la anualidad, descuidando tal vez otros ejes u actividades importantes en el marco de sus funciones y el fortalecimiento de su accionar.

Sumado a lo anterior y según lo normado para los contratos de prestación de servicios, para dicho talento humano no es de obligatoriedad su permanencia, pero sí es importante que por lo menos cada vigencia tenga continuidad en sus procesos de aprendizaje e intervención en lo que

respecte a la misionalidad del SENA, por tal razón, esos espacios de tiempo que se observan en la fecha de finalización inicial de los contratos y posterior adición de recursos y tiempos para dar por cumplido el objeto de intervención del contrato, puede facilitar escenarios de corrupción en la no continuidad del contratista por diversos motivos (algunas veces no justificados) y que como se ha visto en episodios recientes pueden verse influenciados por intereses y ciclos políticos (denuncia de irregularidades en la entidad que motivaron la declaratoria de insubsistencia de la exdirectora, Maria Andrea Nieto por acusaciones en contra de su antecesor durante la administración del gobierno Santos), lo cual también ha sido denunciado por el Sindicato de la institución y son materia de investigación actual por los entes respectivos,

No se puede desconocer que el presupuesto asignado a cada institución del Estado, es programado en la vigencia anterior a su ejecución, teniendo en cuenta recursos ejecutados y resultados de gestión de vigencias anteriores, sin embargo, estos presupuestos se definen en espacios de discusión del nivel directivo y nacional pero sus resultados de gestión no responden con las dinámicas de los contextos territoriales y las necesidades de las poblaciones objeto, ya que los recursos inicialmente asignados son insuficientes para el cumplimiento de las metas institucionales, obligando a la emisión de prorrogas y/o adiciones contractuales buscando cumplir con los fines del Estado, pactado en la Constitución Política y otras disposiciones, sobrecargando el andamiaje administrativo, jurídico y financiero de la entidad, afectando los principios de planeación, transparencia y eficiencia de la administración pública.

## **CONCLUSIONES**

1. El Estado es el primer garante de los preceptos constitucionales de un país, por ende, todas sus acciones deben enmarcarse en la garantía de derechos de sus gobernados, dando cumplimiento al principio de transparencia, el cual es un precepto transversal en toda la normatividad que nos rige.

2. La contratación estatal esta normada desde los mismos parámetros que la Constitución Política establece, pasando por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, entre otros, todos estos establecen y se complementan al conceptuar que la planeación es un eje fundamental en la administración pública, la cual debe ser contemplada desde una línea del tiempo que analice los requerimientos y necesidades a suplir, a su vez busque garantizar el cumplimiento del objeto señalado a intervenir, prevea los riesgos y genere un impacto a futuro para la comunidad o población objeto de acción, haciendo parte de todo el trasegar precontractual, contractual y poscontractual para el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de gestión de las instituciones del Estado.
3. La ausencia de planeación en los procesos contractuales puede generar un riesgo potencial en el no cumplimiento de los fines y principios del Estado, desgastando el aparato administrativo y jurídico de las instituciones, utilizando inadecuadamente los recursos y no supliendo las necesidades de las comunidades y del territorio.
4. Los estudios previos son el instrumento que permite visibilizar y evaluar la necesidad de un servicio que sustenta un futuro contrato, por esto, es allí donde se deben plasmar todos los argumentos que conllevan a requerir la contratación, teniendo en cuenta el antecedente histórico que lo sustenta, así como el presupuesto y plazo a establecer para cumplir con el objeto contractual, la población a intervenir, la medición del impacto, riesgos potenciales y la garantía a futuro del cambio esperado por la intervención dada que permite la sostenibilidad económica y la generación de fuentes de empleo concretas para los aprendices.
5. La planeación es un proceso dinámico que integra varios aspectos en la línea del tiempo fundamentales para evitar tropiezos en la puesta en marcha de la misión y visión de las instituciones del Estado, en concordancia con los principios de economía, transparencia,

publicidad, eficiencia y eficacia, igualdad, entre otros e importantes para la garantía de derechos de los gobernados y los fines del Estado plasmados en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política como en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

6. En el SENA para la vigencia 2019, se evidencia que en los contratos de prestación de servicios revisados en el SECOP II, se registran adiciones y/o prorrogas a fin de garantizar las acciones por parte de los profesionales según el perfil requerido, los ciclos de formación y ambientes de aprendizaje.
7. Dentro de los estudios previos revisados, así como en las justificaciones emitidas por los supervisores contractuales, existe un gran vacío argumentativo que sustente de manera amplia la elaboración de las prorrogas y/o adiciones a los contratos; dichos documentos se limitan a detallar obligaciones y objetos contractuales y no describen a fondo otros aspectos fundamentales al momento de definir la continuidad o no del contrato en curso, ni tampoco desglosan los eventos históricos que soportan la oferta requerida.
8. Acorde a los objetivos de la presente revisión y según lo hallado en la documentación cargada al SECOP II, no se evidencia un instrumento de planificación que contemple de manera concreta presupuestos, plazos, ciclos formativos. Por ende, el ejercicio de planeación de la contratación no encuentra sustento al momento en que los directivos gestionan recursos para lograr cumplir sus indicadores de la entidad, lo que da a entender que es necesario la gestión continua ante el Ministerio de Trabajo y Hacienda para la consecución de recursos que garanticen el presupuesto requerido en las adiciones y/o prorrogas que se realizan a los contratos de prestación de servicios y con ello responder a lo esperado por la población objeto.
9. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA como otras instituciones y Entes del Estado, aun presentan fallas en la planeación de sus acciones, que generan riesgos potenciales para

el cumplimiento de sus objetos misionales, afectando en gran medida al conglomerado de su población, ya que suspende procesos importantes de las dinámicas sociales de los territorios, generan inconformismo y falta de credibilidad en los representantes del Estado y no permite la mejora de las condiciones de vida tanto de sus beneficiarios como de su talento humano, toda vez que dichas rupturas o situaciones de tensión conllevan la pérdida de compromiso y credibilidad en los procesos de formación, así como también entre otros aspectos no permite una continua intervención preventiva frente a las problemáticas sociales que actualmente aquejan la sociedad y no genera acciones de impacto en la construcción de redes y en su economía familiar, comunitaria y global.

10. El nivel directivo de la entidad tiene la obligación como representante del Estado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales, ejes misionales y demás funciones otorgadas, sin embargo, la dinámica contractual de la vigencia 2019 al interior del SENA según lo revisado en el presente ensayo, además de los procesos de investigación en curso, dan a entender que dichos funcionarios han faltado al deber objeto de cuidado como lo es la administración del recurso público y el cumplimiento del principio de planeación en la administración de la entidad, ya que no se cuenta con un presupuesto anual que de cabal cumplimiento de los objetos contractuales, lo cual debe ser gestionado meses atrás de iniciar cada anualidad y según los informes de ejecución y el deber misional de la institución, conduciendo a la entidad a la elaboración de adiciones y/o prorrogas que desgastan el actuar de la administración y ponen en riesgo la continuidad de los procesos señalados, perjudicando a los aprendices, a los instructores e incluso al personal administrativo, situación que se señala como falta disciplinaria en el código penal.

## Referencias bibliográficas

### Doctrina

1. Coelho, F. (2017). Libro El Arte de la Guerra. Cultura Genial. Recuperado de:  
<https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf>
2. Delgado, I. (2012). Historia de la planeación estratégica. Recuperado de:  
<http://indiradelgado.blogspot.com/2012/03/indiradelgado-morato.html#:~:text=El%20concepto%20de%20planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica,adecuadamente%20para%20lograr%20sus%20objetivos.>
3. Sanchez, C. (19 de febrero de 2020). Citar Leyes y Documentos Legales – Referencia Bibliográfica. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/citar-leyes-documentos-legales/>
4. Normas de competencia laboral. Planeación Estatal. Departamento Nacional de Planeación – Departamento Administrativo de la Función Pública. Recuperado de:  
[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1491407308\\_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1491407308_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf)
5. Cuéllar Cruz, M. (2010). Recomendaciones para la elaboración de estudios previos. Aplicación del principio de planeación en la contratación de las entidades públicas. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. Recuperado de:  
<https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf>

6. Amaya, C. El principio de planeación en la contratación estatal, un principio no tipificado. Revista Vía Iuris, núm. 20, enero-junio, 2016, pp. 105-119. Fundación Universitaria Los Libertadores. Bogotá, Colombia. Recuperado de:  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273949068006>
7. Pelaez, O. Ensayo: La contratación estatal como mecanismo para desarrollar los fines esenciales del Estado. Universidad de Santiago de Cali. Febrero de 2019. Recuperado de:  
<https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/505/LA%20CONTRATACION%20D3N%20ESTATAL.pdf;jsessionid=2FE1A7C1FD538567F3DE97802F2EA914?sequence=1>
8. Etapa precontractual. Recuperado de:  
<https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contratacion-C3%B3n-estatal>
9. Restrepo, J; Betancur, G. (2020). Del principio de planeación en la contratación estatal: un análisis teórico y factico en el orden jurídico colombiano. Ius et Praxis. Vol. 26. N° 2. Talca. Agosto de 2020. Recuperado de:  
[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122020000200104](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122020000200104)
10. Scheller D'Angelo, A & Silva, Sh. (2017). La corrupción en la contratación pública: operatividad, tipificación, percepción, costos y beneficios. Revista Vía Iuris, (N°23). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/2739/273957284004.pdf>
11. Alzate, R. (2020). La violación al principio de planeación contractual como causal de anulabilidad absoluta del contrato estatal. Disponible en:  
<http://dx.doi.org/10.18634/incj.22v.1i.1030>

12. Organización Iberoamericana de Seguridad Social. (2016). 59 años de historia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Recuperado de: <https://oiss.org/59-anos-de-historia-del-servicio/>
13. Aponte, I. (2014). Las fallas de la planeación y su incidencia en el contrato estatal de obra. Revista Digital de Derecho Administrativo. N° 11. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Pp. 177 – 207. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087>
14. Balcázar, A. (2012). La supervisión de los contratos estatales en las entidades autónomas del nivel nacional de la administración pública. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3820/BalcazarMoreno-Ana-2012.pdf?sequence=1>
15. Matus C, Política, planificación y gobierno. Washington D.C: Organización Panamericana de la Salud; 1987. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v13n26/v13n26a03.pdf>
16. Lopera, M. Aspectos históricos y epistemológicos de la planificación para el desarrollo. Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 13 (26): 28-43, enero-junio de 2014. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v13n26/v13n26a03.pdf>

## **Normatividad y Jurisprudencia**

1. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 209. 7 de julio de 1991 (Colombia). Recuperado de: <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

2. Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 28 de octubre de 1993. Recuperado de:  
[https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593\\_archivo\\_pdf4.pdf](https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf)
3. Ley 1150 de 2007. Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 16 de julio de 2007. Recuperado de:  
[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_col\\_ley1150.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_ley1150.pdf)
4. Código Penal Colombiano [CPC]. Ley 599 de 2000. 24 de julio de 2000. (Colombia). Recuperado de:  
[https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/20130808\\_01.pdf](https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/20130808_01.pdf)
5. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 12 de julio de 2011. Recuperado de:  
<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf>
6. Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 28 de enero de 2019. Recuperado de:  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324>
7. Decreto Ley 118 de 1957. [Departamento Administrativo de la Función Pública]. Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 21 de junio de 1957. Recuperado de:  
[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=65462](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=65462)

8. Decreto 222 de 1983 [Departamento Nacional de Planeación]. Por lo cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 2 de febrero de 1983. Recuperado de: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1049915>
9. Decreto 734 de 2012 [Departamento Nacional de Planeación]. Por el cual se reglamente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 13 de abril de 2012. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=46940>
10. Decreto 1082 de 2015 [Departamento Nacional de Planeación]. Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. Actualizado 25 de marzo de 2021. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653>
11. Corte Constitucional (C. C), abril 25, 2012. M. P: Pretelt, Sentencia C-300/12. Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-300-12.htm>
12. Consejo de Estado (C. E), 31 de agosto de 2006. M. P: Fajardo, Sentencia 25000-23-26-000-1991-07664-01 (14287). Recuperado de: <https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52524001>
13. Sentencia Consejo de Estado sec 3ª. Exp. 19730, 5 febrero de 2012. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087>

#### **Otras fuentes bibliográficas:**

1. Anderson Jon Lee. (10 de enero de 2021). Hoy la inseguridad pública y la corrupción son los rasgos de mayor preocupación para cualquier latinoamericano, incluso en su

pensamiento político. Revista Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/online/mundo/articulo/hoy-la-inseguridad-publica-y-la-corrupcion-son-los-rasgos-de-mayor-preocupacion-para-cualquier-latinoamericano-incluso-en-su-pensamiento-politico-jon-lee-anderson/202129/>

2. Colombia Compra Eficiente. (2021). SECOP II. Recuperado de:  
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>
3. Sala de redacción. (30 de enero de 2018). Protestas en el SENA por la falta de contrataciones de cientos de instructores. Opinión Caribe. Recuperado de:  
<https://www.opinioncaribe.com/2018/01/30/protestas-en-el-sena-por-la-falta-contrataciones-de-cientos-de-instructores/>
4. Sindicato SENA. 26 irregularidades halló la CGR Colombia en multimillonario contrato del SENA para renovar la plataforma tecnológica, que van desde el suministro de equipos usados, hasta fallas en la planeación, ejecución y en la interventoría del contrato. 15 de marzo de 2021. Recuperado de:  
[https://twitter.com/sindesenacol/status/1371565068769443843?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1371565068769443843%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\\_&ref\\_url=https%3A%2F%2Fwww.publimetro.co%2Fco%2Fnoticias%2F2021%2F03%2F15%2Fcontraloria-encontro-26-irregularidades-en-contrato-del-sena-para-renovacion-de-su-plataforma.html](https://twitter.com/sindesenacol/status/1371565068769443843?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1371565068769443843%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publimetro.co%2Fco%2Fnoticias%2F2021%2F03%2F15%2Fcontraloria-encontro-26-irregularidades-en-contrato-del-sena-para-renovacion-de-su-plataforma.html)

